

FRANCIA

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ABRIL

El primer ministro comenzó el mes de abril debatiendo con la Unión Nacional de los Estudiantes de Francia (UNEF) el acceso de los jóvenes al mercado laboral. La primera semana del mes fue una semana decisiva para el proyecto de ley relativo a la reforma laboral, ya que el martes 29 de marzo dio comienzo su examen por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional. En el hemiciclo el debate se celebrará los días 3 y 4 de mayo, pero ya es seguro que esta reforma va a experimentar nuevas modificaciones sustanciales.

El viernes 1 de abril fueron depositadas ante la Comisión de Asuntos Sociales unas 750 enmiendas que el lunes, día 4 de abril, fueron publicadas en Internet, donde ya figuraban las que iban a ser examinadas ese mismo día por la Comisión de Asuntos Económicos. Esta cifra está llamada a aumentar pues no tiene en cuenta las propuestas depositadas por el ponente del texto, Christophe Sirugue. Éste diputado anunció que deseaba intervenir, además de en otros temas, en los relacionados con el despido por motivos económicos, y a favor de la pequeñas y medianas empresas.

De forma paralela al inicio del “serial” parlamentario, se abría un nuevo dossier: el de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.

Manuel Valls, que desde el principio venía rechazando el diálogo con la Unef pues la ve instrumentalizada por el ala izquierda del Partido Socialista, cambió de opinión. “Algunas organizaciones, aunque se han opuesto al proyecto de ley [de reforma laboral], han formulado propuestas. Estoy pensando, en particular, en el sindicato de estudiantes Unef, que hace algunas relativas al acceso de los jóvenes al mercado laboral. Estamos dispuestos a examinarlas”, anunció el primer ministro.

Para ello, las ministras de Educación (Najat Vallaud-Belkacem), del Trabajo (Myriam El Khomri) y el ministro de la Juventud (Patrick Kanner), recibieron a las organizaciones representativas de la juventud el miércoles, 6 de abril, y el jefe del Gobierno las recibió a todas ellas a mediados de mes.

Manuel Valls, que ha venido mimando mucho al sindicato Federación de Asociaciones generales de Estudiantes (Fage), aliada de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo y rival de la Unef, reservándole sus declaraciones del 14 de marzo relativas a la extensión de la garantía jóvenes a los que están desempleados y carecen de formación, apostaba por el deterioro de la movilización con la llegada de las vacaciones escolares.

Se desconoce si este cambio radical es el resultado de las movilizaciones del 31 de marzo. En todo caso, este movimiento de protesta demostró que el dossier “juventud” puede contaminar de manera duradera el final del quinquenio, cuando François Hollande había prometido que la juventud sería su prioridad. No es por nada que el Elíseo ha influido para que se inicie el diálogo sobre la inserción de los jóvenes en el mercado laboral que reclamaba la ministra de la Educación, Najat Vallaud-Belkacem, desde el principio de la crisis de la ley Trabajo.

Por su parte, la Unef, que sabe perfectamente que el texto no va a ser retirado, la víspera de la movilización del 31 de marzo demostró que estaba dispuesta a negociar: en un comunicado pedía la retirada del proyecto de ley, pero unía una lista de reivindicaciones claras y precisas.

Se van a estudiar varios temas, principalmente, la prolongación de las becas más allá del final de los estudios para los titulados procedentes de familias con ingresos bajos; el acceso de los que han obtenido un bachillerato profesional o tecnológico a los BTS (diploma nacional de la enseñanza francesa superior, que se prepara en dos años tras la obtención del bachillerato) o a los Institutos Universitarios de Tecnología (instituto interno de una universidad que dispensa, como formación inicial y continua, una enseñanza superior destinada a preparar a las funciones de encuadramiento técnico y profesional, en ciertos sectores de la producción, la investigación aplicada y los servicios); la variación de la remuneración de los aprendices en función de su edad, y el reconocimiento de los títulos en los convenios colectivos. “Queremos debatir pero no a cualquier precio; no nos harán confundir Roma con Santiago”, advierte William Martinet, presidente de la Unef.

El debate sobre las estadísticas del paro vuelve a saltar a los titulares de los periódicos en este mes de abril provocado por el exministro de Trabajo, François Rebsamen. Según él, Pôle emploi “no es una herramienta estadística fiable. Las cifras erráticas transmitidas todos los meses lo demuestran”. El alcalde de Dijon prefiere las estadísticas publicadas trimestralmente por el Insee que, afirma, “reflejan mejor la realidad económica”.

Y, en efecto, según un documento publicado en enero pasado por Pôle emploi, cuando el número de desempleados de la categoría A (que no han trabajado ni una hora durante el mes anterior) aumenta en 27.000 en un mes, “existe un 95% de probabilidades de que la tendencia a medio plazo sea igualmente al alza”. La cifra mensual es muy difícil de interpretar...

Pero, sobre todo, hay un problema de talla: desde hace cinco años, las dos series estadísticas divergen cada vez más. A finales de 2015, el Insee contaba 2.860.000 de parados, cuando en la misma fecha, Pôle emploi censaba 3.580.000 de demandantes de empleo de categoría A. Una diferencia de casi 700.000 personas, cuando en 2012 sólo era de 300.000.

El resultado es que, con el indicador Pôle emploi, el balance de François Hollande es calamitoso mientras que con el del Insee es mucho mejor.

¿Cómo explicar esto? Pues primero, contrariamente a las apariencias, las dos Administraciones no miden la misma cosa. Pôle emploi sólo contabiliza las personas que se inscriben en sus servicios. Es suficiente con registrarse para ser considerado como demandante de empleo de categoría A, sin forzosamente estar obligado a buscar un empleo. Por su parte, el Insee envía un cuestionario trimestral a 100.000 franceses y considera que una persona como demandante de empleo, en el sentido de la OIT, a toda persona que no ha trabajado durante el mes anterior, que ha efectuado una búsqueda activa de empleo y está disponible para ocupar un empleo en las dos semanas siguientes.

Por lo tanto, es posible que alguien sea contabilizado como demandante de empleo por Pôle emploi y no por el Insee, e inversamente.

Así, los jóvenes de 15 a 24 años desempleados no cobran ninguna prestación de paro y muchos estiman que registrarse en Pôle emploi no tiene ningún interés. No estarán integrados en la categoría A, mientras que el Insee los considerará demandantes de empleo. Total, “nuestros resultados son distintos porque no medimos la misma cosa”, resume Anne-Juliette Bessone, jefa de la división de Síntesis y Coyuntura del Mercado laboral del Insee. Tanto más cuanto que las cifras de Pôle emploi dependen de criterios puramente administrativos: la supresión progresiva de la dispensa de buscar trabajo en el caso de los mayores de 55 años o la evolución de las modalidades de exclusión y de las fechas de actualización de la situación, tienen efectos importantes en las estadísticas.

La explosión del paro de larga duración ha desanimado a muchos de buscar un empleo. De ahí “la desconexión creciente entre las cifras de Pôle emploi y las del Insee”, confirma Bertrand Martinot, autor del libro “Para terminar con el paro”. Estos parados están registrados en Pôle emploi pero le dicen al Insee que no buscan empleo.

Queda un fenómeno alentador para las estadísticas: cuando el Insee pregunta a los franceses si están registrados en Pôle emploi, las respuestas coinciden con las cifras de Pôle emploi. Hay pues un atisbo de esperanza en la selva de las estadísticas.

Ha comenzado la batalla de las enmiendas a la reforma laboral. Más de 600 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral fueron presentadas ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, que el lunes 4 de abril inició su examen. Las enmiendas de los oponentes al texto, destinadas, en su inmensa mayoría, a restablecer la versión inicial del mismo, no tienen prácticamente ninguna probabilidad de ser adoptadas. Y las depositadas por los socialistas, en particular por la presidenta de la Comisión, Catherine Lemorton, ponen de relieve los puntos del texto todavía sensibles que podrían evolucionar. Sólo algunas de las presentadas por el diputado del Partido Socialista, ponente del texto, Christophe Sirugue, fueron publicadas el martes 5 por la noche.

Despido: se encamina hacia pequeñas medidas destinadas a las PYMES

Los diputados comunistas y los rebeldes del Partido Socialista reclaman la supresión del artículo 30, relativo al despido por causas económicas. Aunque será en vano. No obstante, este artículo debería evolucionar: el ponente ha comunicado su voluntad (con el apoyo del Gobierno) de distinguir el número de trimestres de disminución de la actividad necesario para justificar despidos por causas económicas. El texto actual evoca cuatro trimestres, pero este número podría ser reducido en el caso de las Pymes y las microempresas, y aumentado en el de las grandes empresas.

Un texto endurecido para las grandes empresas

Una enmienda de Jean-Patrick Gille, vicepresidente PS de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, prevé que la apreciación de las dificultades económicas de las empresas con al menos 1.000 trabajadores, de grupos implantados en varios países, debe realizarse a nivel europeo y no, tal y como lo prevé el texto, únicamente en territorio francés. El tema está en carpeta.

Código de trabajo: anulados los principios de las Comisión Badinter

Los principios dictados por la Comisión Badinter (encargada de redactar el preámbulo de la ley) tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Incluso el ponente del texto recomienda su supresión. Confiar a un grupo de expertos la escritura del Código de Trabajo es refutado por todos los diputados, cualquiera que sea su partido de procedencia. Por el contrario, sí podría agregarse la garantía de que la reforma consagre las normas legales en vigor, a falta de acuerdo colectivo.

La jornada de trabajo en el centro del debate

Ya sólo el artículo 2 del proyecto de ley, relativo a la duración de la jornada laboral, que recogerá el Código de Trabajo, ha sido objeto de cerca de 100 enmiendas. Los comunistas y los ecologistas quieren suprimirlo, mientras que la derecha defiende el retorno a la versión inicial del texto. Los diputados rebeldes del PS quieren, como mínimo, limitar su alcance; por ejemplo, por lo que al aumento de las horas extraordinarias se refiere, restableciendo la primacía del acuerdo sectorial sobre el acuerdo de empresa. Pero parece improbable que la Comisión retome esta parte del texto, que el ala reformista de la izquierda estima

equilibrada. Sin embargo, la Comisión debería aprovechar para otorgar fuerza de ley a, al menos, dos jurisprudencias recientes: la contabilización dentro del tiempo de trabajo del trayecto domicilio-trabajo de los trabajadores itinerantes, y el pago de las vacaciones pagadas en caso de despido por falta grave.

Acuerdo sobre el empleo: se realizan esfuerzos para los trabajadores refractarios

Más allá del debate sobre la necesidad o no de suprimir los acuerdos denominados “ofensivos”, el debate se va a focalizar en las consecuencias del rechazo por el trabajador de los sacrificios que se le requieren. El proyecto prevé un despido *sui generis* por causa personal, pero una enmienda socialista firmada por Jean-Patrick Gille defiende que debe ser un despido por causas económicas. Ello permitiría que el trabajador se beneficiase de medidas de acompañamiento y de ayudas para su reclasificación.

Representatividad empresarial: ¿suprimir o modificar?

Esta enmienda ha sido presentada únicamente por Catherine Lemorton. Dicha enmienda es radical puesto que recomienda “suprimir las disposiciones relativas a la medida de la audiencia de la representatividad empresarial presente [...], que fragilizan la representación de las pequeñas empresas”. El línea de mira, los 60% que obtendría el Medef si su acuerdo con la Confederación general de Pequeñas y Medianas empresas, denunciado por la UPA (autónomos), se aplicara tal y como está escrito en el proyecto de ley.

Referéndum: posibles ajustes

Según los diputados rebeldes se deben suprimir: la consulta a los trabajadores antes de validar un acuerdo minoritario, que debe ser facilitada, y permitir la a cada uno de los sindicatos firmantes, de manera individual.

Mayor protección al regreso de un permiso por maternidad

Varias enmiendas retoman la proposición de ley de la radical Dominique Orliac, que hace un año la Asamblea adoptó por unanimidad. Ésta prolonga de cuatro a 10 semanas el periodo legal de protección contra el despido al regreso de un permiso por maternidad.

La comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea ha estudiado una de las grandes novedades de la ley El Khomri: la **posibilidad de firmar acuerdos**, no ya de mantenimiento en el empleo -tal y como lo permite la ley de 2013- sino **de los denominados “ofensivos” para de desarrollo del empleo.**

Por ejemplo, para hacer frente a una nueva licitación, una empresa podrá requerir de sus asalariados la realización de más horas o una organización distinta del tiempo de trabajo. La única obligación será la conservación del sueldo mensual. Por el contrario, el salario / hora podrá variar si respeta los mínimos legales y convencionales. Los asalariados podrían así ser requeridos para trabajar más pero no cobrar más.

Otra obligación es que estos cambios deberán ser negociados con los interlocutores sociales en el ámbito de un acuerdo colectivo mayoritario. A falta de haber estipulado la duración del acuerdo en el texto, está será establecida en cinco años.

El dispositivo votado *in fine* ha sido muy criticado por los diputados de la comisión más a la izquierda de la izquierda. Pero son las condiciones en las que un trabajador puede rechazar la modificación de su contrato como consecuencia de esta clase de acuerdo, las que han provocado mayor discusión. En el texto del Gobierno, un trabajador que rechace que se le aplique el acuerdo es despedido por causas personales. Y esto es totalmente distinto de lo

que indican los acuerdos de mantenimiento en el empleo (AME), que implican un despido individual por causas económicas, pero sin que se produzca un plan de conservación del empleo más allá de 10 despidos individuales.

Los diputados también votaron la supresión del artículo 19, que define los criterios de la representatividad patronal –con gran alivio por parte de la Unión profesional de los Artesanos (UPA), a contracorriente del acuerdo firmado entre el Medef y la Confederación general de Pequeñas y Medianas empresas (CGPME). El empresariado ha sido instado a encontrar un nuevo compromiso.

Uno de los puntos del **proyecto de ley El Khomri** que mayor rechazo han provocado por parte de los interlocutores sociales es el **despido por causas económicas**. Sin embargo, el debate en Comisión en la Asamblea Nacional fue rápido. El ponente del texto, Christophe Sirugue, ha conseguido que se votara el artículo 30, que define con precisión el despido por causas económicas integrando elementos de la jurisprudencia, sin mucha oposición por parte de los diputados. Para ello, el Sr. Sirugue veló por enmendar el texto gubernamental, modulando los criterios de disminución del volumen de negocios, que podrán ser invocados por la empresa en función de su plantilla. Iniciativa que ha sido apoyada por la ministra de Trabajo.

Según el texto de la enmienda, una empresa con menos de 11 trabajadores podrá justificar el recurso a uno o varios despidos por causas económicas si su volumen de negocios baja durante más de un trimestre (comparado al año anterior). Las empresas con 11 a 50 trabajadores deberán justificar dos trimestres consecutivos, y las que cuentan entre 50 y 300 trabajadores, tres trimestres consecutivos. En el caso de una plantilla con más de 300 trabajadores el número de trimestres continúa siendo cuatro, o sea, el periodo establecido de manera supletoria en el texto del Gobierno.

Estos criterios no son exclusivos. La empresa que despidan económicamente a uno o varios trabajadores es libre de invocar otros criterios que demuestren el carácter significativo de sus dificultades económicas.

Las organizaciones empresariales que representan a las micro y a las pequeñas y medianas empresas, encabezadas por la Unión Profesional Artesanal (UPA) y la Confederación general de las Pequeñas y Medianas Empresas (CGPME), se han mostrado satisfechas con las distintas formas de tener en cuenta la magnitud de una empresa, que de hecho, es muy ventajosa para las más pequeñas. Pocos países van a tener una legislación tan flexible en materia de despido por causas económicas en las microempresas y las pequeñas y medianas.

La debilidad del dispositivo, que la oposición ha subrayado, es debida al hecho de que éste ha agregado nuevos umbrales a la legislación social, cuando el Ejecutivo está tratando, desde hace meses, borrar los famosos efectos de umbral. Además, la introducción de umbrales según la magnitud de la empresa es siempre un tema delicado desde el punto de vista jurídico. Y el Gobierno lo sabe, puesto que la limitación de las indemnizaciones por despido que conceden los tribunales de lo social recogidas en la ley Macron, variables según la magnitud de la empresa, fue censurada por esta razón por el Consejo Constitucional el año pasado.

Los diputados también han introducido en el texto dos evoluciones importantes: primero, han completado la definición de “dificultades económicas”, agregando un indicador del deterioro del excedente bruto de la empresa. Y después, han suprimido su reenvío a una eventual negociación colectiva sobre los criterios de los despidos, tal y como lo preveía el proyecto de ley.

Por el contrario, los diputados han aplazado el examen de la evolución del perímetro sobre el cual deberán ser apreciadas las dificultades económicas de una empresa presente en varios países a una próxima sesión en el hemiciclo. “El tema no es [un perímetro] más europeo o menos europeo, sino cómo no exonerar de su responsabilidad a un grupo”, declaró el Sr. Sirugue, aclarando que depositará varias enmiendas. Pero, agregó que la negociación con el Gobierno “no ha terminado”.

Principales puntos enmendados:

- Los 61 principios de la Comisión Badinter han sido completamente retirados del texto por los diputados.
- Las 11 horas de descanso consecutivo han sido consagradas y sólo podrán ser fraccionadas mediante acuerdo colectivo.
- Para desarrollar el empleo las empresas podrán firmar acuerdos “ofensivos”. Las medidas de acompañamiento de los trabajadores despedidos que rechacen el acuerdo, serán especificadas en una próxima sesión parlamentaria.
- La definición del despido por causas económicas varía según la magnitud de la empresa con objeto de poder adaptarse a la realidad de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Seguro de paro: las negociaciones experimentan dificultades para comenzar. Los interlocutores sociales se reunieron el jueves, 7 de abril, en una sesión de negociación sobre el futuro del seguro de paro. Ésta era la cuarta de las seis programadas, pero la primera en la que abordaban la cuestión del futuro del régimen general de la Unedic (organización encargada de gestionar el seguro de paro).

La discusión se centró en el trabajo efectuado por Pierre Cahuc y Corinne Prost para el Consejo de Análisis Económicos. Estos dos investigadores han propuesto reformar las reglas del cálculo de la prestación, al objeto de evitar un efecto paradójico del sistema actual de acumulación de un empleo con las prestaciones de paro dentro de un mismo mes: el hecho de que un trabajador que trabaja con jornada completa o casi completa, inscrito en Pôle emploi, gane en total más que un trabajador que trabaja con jornada completa y no está inscrito en Pôle emploi.

El estudio realizado por la Unedic ha demostrado que el sistema recomendado castiga a los demandantes de empleo con contratos de muy corta duración. Todos los interlocutores sociales han estimado que la solución propuesta no podía ser retomada tal cual; lo que no quiere decir que el dossier se haya cerrado. La CFDT quiere trabajar el modo de cálculo para evitar los excesos. Sin embargo, el patronato no abandona la idea de la rebaja de las prestaciones unida a aumento del periodo de indemnización.

Por otra parte, además de una reforma del modo de cálculo de las prestaciones, también quiere establecer la reducción gradual de las prestaciones pero centrada en la efectividad y no en la búsqueda de empleo e, igualmente, el retroceso de la apertura de los derechos específicos de los séniores.

La siguiente reunión de negociación se celebró el 28 de abril, aunque el 14 de abril tuvo lugar una reunión técnica para especificar la cuantificación de las medidas sobre las cuales deberá trabajar la Unedic.

Las **numerosas manifestaciones** que durante el mes de abril **ha llevado a cabo la juventud para que el Ejecutivo retire el proyecto de ley de reforma laboral**, le han impelido a **adoptar un abanico de medidas** destinadas a reconciliarse con ella.

Así, Manuel Valls recibió el lunes día 11 de abril a los sindicatos estudiantiles para una cumbre social especial jóvenes encubierta. Frente a las protestas por el proyecto de ley de reforma laboral, el primer ministro estuvo resistiéndose, tratando de eludir a la Unión nacional de los Estudiantes de Francia (Unef) y favoreciendo a la Fage, segunda organización de estudiantes detrás de la Unef.

En sus anuncios sobre la evolución del texto, el 14 de marzo pasado, las únicas medidas destinadas a los jóvenes eran para satisfacer al segundo sindicato estudiantil afín a la CFDT, principalmente con la extensión de la Garantía jóvenes. Pero, finalmente, el primer ministro tuvo que decidirse a iniciar el diálogo con la Unión nacional de los Estudiantes de Francia, declarándose, el 1 de abril, “dispuesto a examinar sus propuestas”.

El miércoles 6 de abril, tanto la Unef como la Federación de Asociaciones generales Estudiantiles (Fage) y los sindicatos de estudiantes de secundaria, fueron recibidos por las ministras de Trabajo y Educación nacional, y por el ministro de la Juventud. Cinco días más tarde, el jefe del Gobierno se entrevistó con ellos para presentarles un conjunto de medidas a favor de los jóvenes, considerablemente inspiradas en el pliego de reivindicaciones de la Unef.

El Gobierno prometió ser “muy ambicioso”. La negociación se celebró al nivel más alto del Ejecutivo, ya que tanto el presidente de la República como el primer ministro intervinieron directamente en este dossier.

Entre las medidas esperadas, figuraba la prolongación de las becas de estudios al inicio del curso 2016. “Una respuesta verdadera a un problema verdadero”, según reconoció la ministra de Educación nacional, Najat Vallaud-Belkacem, quien evocó una horquilla de 4 a 6 meses. Abonar, al final de la escolaridad, cuatro meses más de beca beneficiaría a un tercio de los estudiantes y costaría 100 millones de euros al año. Pero esta “ayuda a la búsqueda de un empleo” también sería propuesta a los bachilleres (que no eran becarios con anterioridad) que tratan de entrar en el mercado laboral después de haber cursado el bachillerato. En todo caso, deberán estar inscritos en Pôle emploi y justificar una búsqueda activa de empleo.

El Gobierno también está preparando medidas para los aprendices, en particular sobre el acompañamiento durante los estudios. La Unef reclama la supresión de los límites de edad para su remuneración, que es más alta después de los 18 años y después de los 21. También se plantea el final del coeficiente de minoración en el caso de los aprendices menores de edad, aunque no para el inicio del curso próximo, con el fin de no enfurecer a los empresarios potenciales.

La discusión fue muy ardua sobre este tema y, por otra parte, el establecimiento de una ayuda para el acceso a una mutua complementaria de salud o incluso gratuita, también fue evocado por los becarios. Este dossier ha sido igualmente objeto de ásperas discusiones pues algunos reclamaban que esta medida sea reservada a los jóvenes en ruptura familiar (y que no pueden beneficiarse de la mutua complementaria de salud de sus padres).

Los anuncios realizados por Manuel Valls intervinieron cuando la movilización contra el proyecto de ley de reforma laboral estaba estancada. El 31 de marzo, según la policía, salieron a la calle 390.000 personas y tal vez haya sido esto la culminación de la movilización contra este texto. El sábado pasado, 9 de abril, la tercera gran cita convocada por los sindicatos de trabajadores y de estudiantes sólo reunió a unas 120.000 personas en toda Francia. Una nueva movilización fue anunciada para el 28 de abril. Pero el movimiento no retrocedió, ha continuado vivo y tomó otra dimensión más política y menos orientada hacia la reforma laboral, principalmente, vía el desarrollo de las “Nuits debout” (los Indignados franceses).

A un año de las elecciones presidenciales es urgente que François Hollande, que hizo de la juventud su prioridad durante la campaña de 2012, restablezca el diálogo con ella. Un sondeo reciente de Elabe para el diario *Les Echos* muestra que para el 95% de los franceses, la situación de los jóvenes no ha mejorado desde el principio del quinquenio. Una desaprobación inapelable.

Trabajo desplazado. Nunca más que ahora quiere Francia estar a la vanguardia de la lucha contra los abusos vinculados al trabajo desplazado, del que sufren numerosas pequeñas y medianas empresas. Mientras el Gobierno vuelve a lanzar la batalla en Bruselas, la comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional adoptó, el jueves 7 de abril, una enmienda a la ley de reforma laboral que apunta hacia el papel clave de las ETT extranjeras en algunas formas de dumping social.

La exposición de la enmienda, depositada por el diputado del PS Gilles Savary, denuncia el increíble mecanismo de las ETT luxemburguesas que, con toda legalidad, desplazan a Francia –con un coste mínimo– a trabajadores franceses que residen en... Francia. Aprovechando las cargas sociales muy bajas del Gran Ducado, éstas les invitan a cruzar la frontera sólo para registrarse, antes de volverla a cruzar para realizar misiones cerca de casa. “Esta práctica tan dudosa” también afecta a Bélgica y ha sido denunciada en un informe del Consejo Económico, Social y Medioambiental (Cese).

La enmienda impone a los trabajadores temporales desplazados a Francia las “mismas condiciones de empleo y trabajo” (salario, prima de final de misión, etc.) que a los trabajadores temporales de una ETT del Hexágono. Pero, tal y como lo explica Franck Morel, abogado del bufete Barthélémy, “esto ya está previsto en el Código de Trabajo” y “no soluciona el problema de la diferencia de las cargas sociales, que funciona a nivel europeo”. Y esto lo confirma el ministerio de Trabajo, saludando una enmienda que “traslada esta medida de la parte reglamentaria a la parte legislativa del Código de Trabajo, y le va a dar visibilidad”. Su autor, Gilles Savary, afirma que lo principal es “enviar una señal fuerte a Europa para luchar contra el desplazamiento de trabajadores temporales, que distorsiona el desplazamiento y lo convierte en un mercado de colocación de bajo coste”.

El problema supera ampliamente el caso único de las ETT transfronterizas y se están desarrollando circuitos más complejos: una ETT basada en un país A contrata a trabajadores de un país B, a quien envía en misión a una empresa de un país C y, ésta misma, los envía desplazados a otro país, etc.

Bajo el impulso de Francia y Alemania, la Comisión Europea presentó el 8 de marzo pasado un proyecto de modificación de la directiva de 1996 sobre el trabajo desplazado, cuyas brechas permiten estas derivas. Este proyecto aprieta la tuerca en ciertos puntos, principalmente recomendando la generalización en todos los Estados del principio de “a trabajo igual, salario igual”. Pero esto está lejos de arreglarlo todo. El ministerio también quiere prohibir los sistemas de “doble desplazamiento” o, igualmente, limitar las posibilidades de desplazamiento sólo del residente real del país de la empresa que desplaza.

Prism’emploi (patronal de las ETT francesas) quiere que “se prohíba el desplazamiento de los trabajadores en el país donde residen”. El informe del Cese va en esta misma dirección, con excepciones destinadas a los fronterizos.

Francia está tratando de impulsar medidas para frenar a las ETT “buzón”, con la obligación de justificar una “actividad sustancial” en el país desde el cual desplazan a un trabajador. La voluntad está presente. Pero los debates con los países del Este serán muy duros.

Un plan de más de 400 millones de euros para ayudar a los jóvenes. Manuel Valls no ha escatimado nada para calmar a los jóvenes que recibió el lunes 11 de abril en Matignon. El primer ministro anunció una batería de medidas que van a costar varios centenares de millones de euros.

A continuación indicamos las medidas desveladas ayer por el primer ministro:

[Subsidio para la búsqueda del primer empleo](#)

A la salida de una formación profesional de primer grado (CAP o certificado de aptitud profesional), de un bachillerato profesional, de una formación profesional de segundo grado (BTS o diploma de técnico superior - enseñanza superior), un diploma universitario de tecnología (DUT), una licenciatura, un master o un título de ingeniero; todos los becarios que entren en el mercado laboral cobrarán un subsidio para la búsqueda del primer empleo durante los cuatro primeros meses que siguen la obtención de su título o diploma, es decir, según el Centro de Estudios e Investigación sobre las Cualificaciones, “durante el tiempo medio pasado en el paro por un joven titulado en el transcurso de los tres primeros años de su vida activa”.

Concretamente, cada año 70.000 se beneficiarán de la prolongación de su beca, según Matignon. Los alumnos de la enseñanza secundaria que estudien con una beca cobrarán 200 euros al mes durante cuatro meses.

Coste presupuestario en año pleno: 130 millones de euros.

[Becas de la enseñanza secundaria y superior](#)

La beca de los alumnos de los institutos va a ser revalorizada en un 10%. También se van a crear 25.000 becas anuales de 1.000 euros destinadas a los estudiantes becarios cuyos padres poseen rentas que sólo les dan derecho a la exoneración de los gastos de matrícula. Los estudiantes que han abandonado los estudios sin haber conseguido un título se beneficiarán del mismo subsidio.

Coste de estas medidas: 65,5 millones de euros.

[Más plazas en las secciones de técnico superior \(STS\)](#)

A partir del inicio del curso 2016 y durante cinco años, se crearán 2.000 plazas suplementarias cada año en las STS para formar técnicos superiores, “particularmente en las especialidades vinculadas a las profesiones con futuro”. Esto representará un gasto de 120 millones de euros en cinco años.

[Acceso simplificado a la mutua complementaria de salud gratuita de la cobertura de enfermedad universal \(CMU\)](#)

En la actualidad, un joven menor de 25 años que ha roto con su familia debe justificar su salida del domicilio fiscal para poder beneficiarse de la mutua complementaria de salud gratuita de la CMU. Una enmienda al proyecto de ley sobre la igualdad ciudadana sustituirá los documentos exigidos para la justificación por una declaración jurada.

Coste de la medida: de 15 a 20 millones de euros para los 30.000 a 50.000 jóvenes afectados.

Empuje a la remuneración de los aprendices

A partir del 1 de enero de 2017 los aprendices menores de 21 años cobrarán 200 euros al mes.

Este aumento, que costará 80 millones de euros en año pleno, será financiado por el Estado.

Por otra parte, el Gobierno va a lanzar una consulta para “lograr una tabla de retribuciones modernizada”.

Garantía de los alquileres (en francés “garantie locative”)

Este derecho, que ya existe para los estudiantes (denominado la “Clef” -la Llave-) y los jóvenes asalariados (“Visale”), va a ser extendido ahora a todos los menores de 30 años. El Estado es garante del alquiler con objeto de que los jóvenes puedan acceder a una vivienda con mayor facilidad.

El coste de esta generalización está evaluado en 100 millones de euros al año y afectaría a 300.000 jóvenes. Pero no pesará sobre los presupuestos del Estado puesto que será soportado por “Action Logement”, actor de referencia en la construcción de las viviendas sociales en Francia, cuyo presupuesto procede de la participación de las empresas en la construcción de dichas viviendas (abonan el 1% de la masa salarial para el alojamiento de sus trabajadores).

Concertación sobre la inserción profesional de los jóvenes

Esta concertación será lanzada en las próximas semanas con los interlocutores sociales y las organizaciones de la juventud y, después, empresariado y sindicatos serán invitados a negociar medidas de acompañamiento (y principalmente experimentar la extensión del ámbito de la asociación de empleo de los cuadros Apec), de ayuda a la movilidad, la vivienda, la mutua de salud, etc.

Encarecimiento de los contratos de duración determinada (CDD). El primer ministro alumbró un nuevo incendio en el campo empresarial: el encarecimiento de las tasas sobre los CDD para favorecer la contratación con CDI. En efecto, según indicó Matignon, el Ejecutivo va a convertir en obligatoria la modulación, mediante una enmienda al proyecto de ley de reforma laboral, aunque especificó que el baremo y el ámbito de la sobretasa deberán ser definidos por los interlocutores sociales en las negociaciones sobre el seguro de paro. Los CDD ya están sometidos a una prima de precariedad del 10% de la remuneración, que se abona al término del contrato y, a mediados de 2013, la cotización al paro de los contratos de menos de tres meses pasó de 1,5 a 3 puntos.

Es una señal política dirigida a la izquierda para evitar el recurso al artículo 49-3 de la Constitución con la reforma laboral. Pero para la Confederación general de las Pequeñas y Medianas empresas es demasiado. La CGPME considera que “ha sido un puñalada en el espalda de las empresas”. La organización patronal “rechaza ser cómplice” de decisiones “estúpidas” y previene que, en sus reuniones de 29 y 30 de abril, va a “preguntar a sus instancias sobre un posible abandono de las negociaciones relacionadas con el seguro de paro”.

Por su parte, el Medef y la UPA (artesanos) apuntan que “tasar no crea empleo”. Antes de la reunión de ayer, Pierre Gattaz, en unas declaraciones efectuadas al diario *Le Figaro*, dejó caer la amenaza de que “sacaría consecuencias” en las negociaciones Unedic de la “visión

caricatural” de ciertos sindicatos, sin nombrar a Fuerza Obrera ni a la CGT por su trabajo de menoscabo contra la ley El Khomri.

La conclusión de las negociaciones –que deberían finalizar a finales de junio- es pues de lo más incierta. El tono cada vez más ofensivo de Pierre Gattaz es el eco de los debates que se están llevando a cabo en el Medef entre los partidarios del diálogo social y los que abogan por una línea de conducta dura frente al Gobierno. Sobre todo, que si durante un tiempo el empresariado ha entreabierto la puerta a la tasación de los CDD, los retrocesos del Ejecutivos en ciertas partes del proyecto de ley de la reforma laboral y la supresión por los diputados del artículo sobre la representatividad patronal, podría incitarle a cerrarla.

El Gobierno esperaba que las negociaciones sobre la reforma laboral y el seguro de paro se completasen y entrasen en la lógica del toma y daca. Al final, por haber gestionado tan mal la primera, está poniendo en peligro la segunda.

Las previsiones de contratación para 2016 suben un 5%. A pesar de que la tasa de paro en Francia no ha sido nunca tan alta, según la encuesta anual de “Necesidades de mano de obra” que ha publicado Pôle emploi, basada en las respuestas de las 430.000 empresas encuestadas a finales de 2015, las contrataciones deberían alcanzar un nivel muy alto en 2016.

Las intenciones de contratación han aumentado en un 5,1% en un año, para alcanzar 1.830.000 (+88.000). Es el total más alto desde hace siete años y, probablemente, de la historia, incluso si los cambios en la metodología en 2010, hacen que toda comparación sea arriesgada. En efecto, hay que relativizar las cifras; el alza, que ha sido continúa estos últimos años a pesar de un crecimiento casi nulo, resulta también del crecimiento de la población activa y de la multiplicación de los contratos de corta duración que “inflan” las contrataciones.

Pero hay que tomar con prudencia este resurgimiento de la confianza, pues el alza es más marcada en los proyectos de contratación de temporada ((742.000, +8,6%) que en los contratos duraderos (cerca de 1.100.000, +2,8%)

El porcentaje de contrataciones previstas con CDI o CDD de más de seis meses de duración alcanza un 56,3% y está en ligero retroceso. El 70% de los proyectos de contratación se concentra en las Pymes con menos de 50 trabajadores; pero, es el dinamismo de las más grandes el que debería tirar del mercado hacia arriba, con unas intenciones de contratación del 8% en las empresas con más de 50 trabajadores.

El sector de los servicios a los particulares y a las empresas continúa ocupando el primer puesto, con cuatro intenciones de contratación de cada 10 (+4,5%). Las perspectivas progresan en la industria (+2,6%) pero con menos rapidez que en los últimos dos años. La evolución más notable la experimenta la construcción, con un alza del 12%, tras un retroceso del mismo nivel en 2015.

Además de los clásicos puestos de trabajo en la hotelería, la restauración (camareros, cocineros, empleados), el mantenimiento y la agricultura (sobre todo los temporeros durante la vendimia), las profesiones más buscadas en 2016 son los ingenieros en R+D y los informáticos.

Otro punto alentador es que el porcentaje de reclutamientos anticipados “difíciles” continúa siendo estable, con un 32,4%, el más bajo históricamente, tras un retroceso de 10 puntos en cuatro años.

Pero las dificultades son todavía dos veces mayores en las pequeñas empresas que en las grandes, y son aún altas en tres profesiones muy buscadas: los ingenieros informáticos, la ayuda a domicilio y las asistentes maternas. También se hace hincapié en la penuria de médicos (70% de reclutamientos “difíciles”), así como de las dificultades para encontrar ciertos obreros o artesanos cualificados (soldadores, fontaneros y techadores).

La inadecuación o la penuria de candidatos son las principales dificultades de las empresas, lejos delante de los límites que pueden constituir las condiciones de trabajo y los salarios propuestos. Para remediar este hecho, Pôle emploi apuesta por: campañas de comunicación con objeto de “romper los estereotipos vinculados a ciertas profesiones”, “la extensión del *sourcing*” mediante la transmisión a las webs de sus socios de ofertas difíciles de cubrir, o el desarrollo de “salones virtuales de reclutamiento”, explica su director general, Jean Bassères.

La principal respuesta continúa siendo el despliegue, finalizado en octubre pasado, de 4.200 consejeros de Pôle emploi. Dedicados al acompañamiento de las empresas. Los primeros resultados son alentadores: estos tres últimos meses la tasa de satisfacción de las empresas que han recurrido a Pôle emploi ha pasado del 65 al 71%, según los indicadores internos del operador.

Según el Programa de Estabilidad en 2016 se prevén 190.000 creaciones de empleo. El miércoles 13 de abril el ministro de Finanzas, Michel Sapin, presentó el Programa de Estabilidad y éste confirma los déficits de Francia así como las previsiones de crecimiento de un 1,5% que tanto se esperan para este año y el que viene.

Aunque el FMI ha echado el martes un jarro de agua fría sobre estas previsiones rebajándolas a un 1,1%, el Alto Consejo de finanzas públicas se muestra más alentador pues estima que el escenario del Gobierno todavía “se puede alcanzar” en 2016, y es “plausible” para después.

Las previsiones de crecimiento no cambian, pero el Gobierno estima que serán más ricas en empleos de lo previsto inicialmente.

Después de haber creado 95.000 puestos de trabajo en 2015, en 2016 se esperan 190.000. De ellos unos 130.000 en el sector mercantil. El programa de estabilidad explica que “tras tres años de repliegue, el empleo asalariado mercantil se estabilizó en 2015 y volverá a crecer en 2016 gracias a los efectos del CICE, del Pacto de Responsabilidad y de la nueva prima para la contratación en las Pymes”. Anunciada a mediados de enero por François Hollande, esta prima debería crear este año unos 30.000 puestos de trabajo en el sector mercantil, según prevé el ministerio de Finanzas. El efecto global de las medidas de reducción del coste del trabajo está estimado en 150.000 empleos.

El Gobierno no proporciona previsiones sobre el paro, pero claramente cuenta con que estas creaciones de empleos serán lo suficientemente numerosas para revertir la curva del paro durante el año. El reto es importante ya que François Hollande condicionó su candidatura a las elecciones presidenciales de 2017 a los resultados obtenidos en el empleo.

El problema es que el Alto Consejo de las Finanzas públicas es mucho más circunspecto en este punto. “El crecimiento del número de empleos que se prevé en 2016 parece alto debido a las estimaciones, también altas, de los efectos de las políticas del empleo”, indica esta instancia independiente, vinculada al Tribunal de Cuentas. También apunta que estas previsiones “son superiores a lo que dejan percibir las previsiones del Insee para el primer semestre”.

En su última nota de coyuntura, el Instituto de Estadísticas sólo anticipaba 37.000 creaciones netas de puestos de trabajo en los seis primeros meses del año. Difícil pues de alcanzar en 12 meses las 130.000 prometidas por el ministerio de Finanzas.

Pero esta vez el Gobierno podrá basarse en las previsiones del FMI, pues aunque éste no anticipa una aceleración de la actividad en Francia este año, sí ve bajar la tasa de paro del 10,4% en 2015, a 10,1% este año.

La edad de la jubilación continúa aumentando en Francia. La Caja Nacional del Seguro de Vejez (CNAV) publicó en abril sus principales datos relativos a las pensiones de base en 2015. Unas 657.000 personas se jubilaron en el año, elevando así el número de jubilados a 13.040.000. La edad media adoptada en lo que se refiere a la jubilación ha aumentado ligeramente así, en un mes, y alcanza los 62,4 años. Si se agregan los beneficiarios de una pensión de reversión, el número total de jubilados del Régimen general en 2015 ascendía a 13.850.000. Cabe subrayar, en número de recién llegados, que las nuevas pensiones de reversión son más dinámicas que los nuevos derechos directos: +7,9% en 2015 frente a +3,3%.

El perfil de estos jubilados se viene modificando poco a poco. En 2015, tenían en término medio 73,8 años frente a 73,6 en 2014. La pensión media también ha aumentado: la de un nuevo jubilado con una carrera completa en el Régimen general (sin contar los regímenes complementarios), alcanzaba 1.112 euros al mes, mientras que los anteriores jubilados cobraban 1.069 euros. Esta es la consecuencia de la prolongación de los estudios y de la mejora de las carreras profesionales al hilo de las generaciones. Además, el aumento sensible del techo de las cuotas de Seguridad Social desde hace años, no aumentó sólo los ingresos: en un segundo tiempo también aumentó el nivel de las pensiones.

En 2015, el Régimen general ha abonado 111.000 millones de euros en prestaciones legales, lo que ha supuesto un alza del 2,3%. Una parte de esta cantidad, 4.400 millones, corresponde a aumentos, pagados principalmente a los 5.500.000 asegurados que han criado al menos a tres hijos. Las pensiones de reversión han costado cerca de 10.000 millones y el mínimo de vejez 2.200 millones de euros.

Los 8.000.000 de jubilados del Régimen general han abonado en 2015 la CSG (cotización social generalizada) completa (7,5%), 1.800.000 la han abonado reducida (3,8%) y el 29% de los pensionistas no están sujetos al pago de esta contribución.

Un hecho destacado de estos últimos años ha sido el auge de las jubilaciones anticipadas por carrera profesional larga: 171.600 en 2015. El umbral de 1.000.000 de personas que se han jubilado en condiciones ventajosas para ellos ha alcanzado, el año pasado, 1.150.000. El perfil de las carreras largas es distinto al de los otros jubilados del Régimen general. Mientras éstos últimos han cotizado, en término medio, 147 trimestres (sumando todos los regímenes), los beneficiarios de una jubilación anticipada han acumulado 176 trimestres (de ellos 45 en el régimen general, es decir, mucho más de los 166 trimestres requeridos para tener derecho a una pensión completa). Entre estos trabajadores, las mujeres se llevan la palma con 183 trimestres en su activo.

Pistas para que los jóvenes puedan tener acceso a los mínimos sociales. El lunes 18 de abril, el diputado del Partido Socialista Christophe Sirugue (que es el ponente del proyecto de ley de reforma laboral) hizo entrega al primer ministro de un informe que contiene sus propuestas de reforma de los mínimos sociales. El Sr. Sirugue recomienda simplificarlos, volverlos más equitativos y fortalecer la eficiencia de las políticas de inserción.

Dicho informe, titulado «*Reconsiderar los mínimos sociales: hacia una cobertura básica común*», propone varios escenarios de racionalización de los nueve mínimos sociales

actuales, pero privilegia el más ambicioso: la refundición de todos estos dispositivos en un mínimo social de base (una suerte de “renta mínima de existencia”), accesible a partir de los 18 años de edad, según indicó el diputado en diciembre a la agencia de prensa francesa AFP.

A esta renta básica se sumarían dos prestaciones: una destinada a las personas que no pueden retomar la vida activa (personas de edad, alto grado de minusvalía), y otra para las personas que esperan reincorporarse a dicha vida activa.

La tasa de pobreza de los jóvenes de 18 a 29 años era del 18,6% en 2013, frente a un 12,3% en la totalidad de la población. Por lo que el diputado afirma que la juventud debe ser “verdaderamente la prioridad de las políticas públicas”. Unos 176.000 jóvenes de 18 a 24 años de edad tienen derecho a esta renta mínima de los demandantes de empleo, a condición de ser padres, de haber trabajado al menos dos años con jornada completa, o bien como cónyuge de un mayor de 25 años que tenga derecho a dicha renta. Christophe Sirugue quiere hacer estallar estas condiciones restrictivas, sin embargo, los jóvenes no tendrían derecho a la RSA como estudiantes; como tales deberían solicitar más bien una beca.

La extensión de la RSA a los jóvenes, que dejarían de estar vinculados al domicilio fiscal de sus padres, supondría una cantidad de 1.200 a 3.800 millones de euros, según los cálculos efectuados en 2012. Pero, mientras tanto, los mínimos sociales han sido revalorizados de manera considerable. Así pues, la dirección del Tesoro ha reevaluado el coste máximo a 6.600 millones de euros, sin tener en cuenta los ahorros ligados a ciertas prestaciones familiares.

Una factura muy dolorosa cuando ya ha sido difícil conservar un presupuesto de 4.000 millones para fusionar la prima por el empleo (PPE) y la RSA-Actividad, en la nueva prima de actividad. El Sr. Sirugue busca pues un camino intermedio. Y subraya que, *“en caso de abrir este derecho únicamente a los jóvenes de 21 años de edad, el coste sería de 3.100 millones de euros”*. La tasa de pobreza en ese grupo de edad caería en 3,8 puntos.

Pero este trabajo es demasiado grande para ser aplicado en enero: además de las cuestiones fiscales, el debate se debe ajustar a la centralización o no de la financiación de la RSA, que en la actualidad es abonada por los departamentos. Además, el Gobierno ha prometido extender la “garantía jóvenes” a todos los menores de 26 años sin empleo ni formación, medida que podría afectar de 150.000 a 200.000 personas y costar 1.000 millones de euros en dos años. Este esfuerzo financiero debería ser “coherente” con la futura RSA Jóvenes.

El presidente de la patronal Medef dio tres semanas al Gobierno para que el Proyecto de ley de reforma laboral vuelva a su versión original. Pierre Gattaz ha querido mostrarse firme ante la prensa y ante los miembros del comité ejecutivo de su organización, pero sin renunciar completamente a continuar con las negociaciones en los próximos días. Aunque no ha querido utilizar la palabra “ultimátum” y ha preferido hablar de “advertencia”, su objetivo es presionar al Gobierno. En efecto, el Sr. Gattaz ha amenazado con pedir la suspensión de las negociaciones relativas al nuevo convenio del seguro de paro si el Gobierno no corrige en profundidad el texto El Khomri de aquí a “tres semanas”.

Este plazo ha sido escogido en función del calendario parlamentario pues el proyecto de ley llegará a sesión de la Asamblea del 3 de mayo. Hasta entonces, el Medef espera que el Gobierno haya preparado enmiendas que modifiquen los artículos que más crisan a los afiliados a esta organización patronal. A saber, la autorización para las empresas que carecen de delegados sindicales (es decir, una mayoría aplastante de empresas) de poder negociar un acuerdo; la cuenta personal de actividad (CPA), que, según Pierre Gattaz, ha

sido “pervertida”, y el encarecimiento de las cuotas que gravan los CDD anunciada por el primer ministro pero que en esta fase no figura en el proyecto de ley. Matignon ha contestado al presidente del Medef con una negativa rotunda.

La prima destinada a las Pymes impulsa las contrataciones. Según las cifras publicadas el miércoles por la Acoff (organismo que, junto con las Urssaf, participa en la recaudación y el reparto de las cuotas de Seguridad Social), el número de contrataciones de más de un mes de duración (sin contar el trabajo temporal), durante el primer trimestre de 2016, han aumentado claramente: +4,8%. Éstas ascienden a 1.870.000, nivel nunca alcanzado desde 2011. Según la Acoff, esta evolución resulta del alza de las contrataciones, tanto con CDD de más de un mes (+5,6%), como de las contrataciones con CDI (+3,8%).

En un año, el aumento es todavía mayor: las declaraciones de empleo de más de un mes han aumentado en un 6,9%. Esta alza es particularmente importante en las empresas con menos de 20 trabajadores (+8,2%), tanto en las contrataciones con CDI (+7,1%) como con las contrataciones con CDD de más de un mes (+9,2%). Por lo que respecta a las empresas con más de 20 trabajadores, éstas registran una progresión del 2,3%.

“Estas evoluciones, muy diferenciadas, coinciden con la aplicación, desde enero 2016, del dispositivo de la prima para la contratación destinada a las Pymes”, indica la Acoff. Se trata de una ayuda de 4.000 euros abonada en dos años, y destinada a las empresas con menos de 250 trabajadores que contratan a un trabajador con un CDI o un CDD de más de seis meses, y cuyo salario sea de hasta 1,3 vez el SMI.

Según el ministerio de Trabajo, más de 200.000 expedientes de solicitud de la prima han sido depositados en tres meses. En el campo, las declaraciones de contratación de las empresas con menos de 250 trabajadores en el primer trimestre de 2016 han progresado en un 4,7% en el caso de los CDI y en un 20,5% en el de los CDD de más de seis meses.

La dinámica progresión constatada por la Acoff en el primer trimestre afecta a todo el sector terciario (+5,1%). Los sectores industrial y de la construcción registran también un alza, aunque más moderada. Finalmente, en un año todas las regiones han visto progresar todas las declaraciones de contratación, menos la Alta Normandía.

Un congreso exutorio para una CGT en declive. Philippe Martínez fue confirmado secretario general de la CGT el viernes día 22 de abril, último día del 51º Congreso de esta central sindical. Esto va a permitir volver la página delicada del anterior secretario general, Thierry Lepaon. Aunque el precio pagado por la CGT es muy alto.

Nunca jamás los debates han sido tan pobres como este año; la movilización en contra de la reforma laboral los ha monopolizado y cabía podía pensar que el congreso iba a trabajar sobre el “Código de Trabajo del siglo XXI”, presentado por la CGT como la alternativa al proyecto gubernamental y cuyo contenido, por el momento, se resume a cuatro páginas escritas de prisa y corriendo, sin debate alguno en la organización que venga a demostrar que no están sólo en una lógica de protesta.

Tanto la Seguridad Social profesional como la protección social han estado ausentes en los debates. Y aunque que la CGT se reivindica como la promotora de la Seguridad Social francesa, ni los organismos sociales ni la sanidad (a pesar de que ésta última es la segunda federación), van a estar representados en la futura Comisión ejecutiva (dirección de la confederación compuesta por 50 miembros).

Philippe Martínez dio el tono en su discurso de apertura, volviéndole la espalda abiertamente a la CFDT, alentando a sus tropas a que pitaran a Manuel Valls y no cerrando la puerta a las “huelgas reconducibles” defendidas por la extrema izquierda y,

particularmente, por los militantes trotskistas del Partido Obrero Independiente (POI), a los que le dio la palabra con mayor frecuencia de lo acostumbrado.

El miércoles día 20, en una asamblea encolerizada contra del Ejecutivo, la dirección de la confederación dejó subir la tensión como nunca, y terminó haciendo una llamada, ya desde ese día, que rompe con el posicionamiento adoptado por la CGT desde hace muchos años: fuera la “huelga general” que se ha convertido en un tabú. Sin embargo, persiste la perspectiva de reconducir, mediante asambleas generales, la huelga interprofesional a la que ahora llama la CGT para el 28 de abril. Esto va a complicar el trabajo de Philippe Martínez si, según toda probabilidad, el Gobierno no retira el proyecto de ley de reforma laboral, pero le ha permitido hacer votar una de las siete resoluciones del congreso que van a constituir las orientaciones de la CGT para los tres próximos años.

El 69% de los mandatos se refieren a la resolución relativa a la “construcción de la lucha” (cerca del 80% sin contar las abstenciones). Pero, señal de que las cosas son más complicadas en la CGT de lo que los debates durante el congreso pueden darlo a entender, los otros textos han sido ampliamente menos votados, en esta organización que hace 20 años podía desgarrarse pero que a la hora de votar se votaba unánimemente.

El documento de orientación sólo ha recogido el 63% de los mandatos (el 70,3% sin contar las abstenciones). El resultado del informe de actividad ha sido impactado por el *affaire* Lepaon, pero no se puede afirmar lo mismo de los demás. Las violentas intervenciones contra “el sindicalismo unido”, sinónimo de trabajo en común con la CFDT, también han demostrado un repliegue en defensa de su propia identidad en unos momentos en que la CGT corre el riesgo de ser derrocada en el sector privado por la CFDT.

La CGT ha hablado muy poco de la evolución del mercado laboral y de las esperanzas de los trabajadores que, sin embargo, están en el centro de los retos sindicales.

Francia continúa a la cola de los países europeos en materia de creación de empleos.

En abril Francia hizo entrega a la Comisión Europea del Programa de Estabilidad, al que anexaba el Programa Nacional de Reformas, destinado éste último a responder a las recomendaciones formuladas por el Consejo de la Unión Europea. En efecto, Francia forma parte de los siete países de la zona euro (con Chipre, Portugal, Eslovenia, Irlanda, Grecia y España) que todavía están sometidos al procedimiento de déficit excesivo. En el caso de Francia, este procedimiento se empezó a aplicar el 27 de abril de 2009. Además, en marzo pasado, la Comisión Europea estimó que Francia adolecía de dos clases de desequilibrios macroeconómicos: uno de endeudamiento y otro de competitividad.

Otros cuatro Estados (Bulgaria, Croacia, Italia y Portugal) padecen un desequilibrio excesivo. La Comisión puede recomendar la apertura de un nuevo procedimiento en contra de estos países, y si el Consejo sigue esta recomendación, Francia se verá obligada a presentar un plan de medidas correctoras. En mayo próximo, la Comisión formulará sus recomendaciones país por país, después de haber examinado los programas nacionales, tras haber analizado la dinámica y la amplitud de las reformas estructurales en ellos propuestas.

Por lo que respecta a Francia, la ponente general de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Valérie Rabault, se centró en el estudio del Programa Nacional de Reformas, que fue presentado el 13 de abril en Consejo de ministros. Para responder a la solicitud de la Sra. Rabault, la dirección general del Tesoro ha llevado a cabo una evaluación -realizada con la ayuda del Modelo Económico de Simulación y de Análisis general de la Economía (Mésange)- del impacto esperado de las reformas económicas ya iniciadas o por iniciar.

Por vez primera, este impacto, en términos de crecimiento y empleo, ha sido medido, no sólo en bruto sino también en neto, incluyendo el coste de su financiación y su traducción en destrucción de empleos o de PIB.

En el documento que el Gobierno transmitió a la Comisión Europea, el impacto de las reformas aplicadas para mejorar la competitividad de la economía francesa y reabsorber sus desequilibrios se evalúa a 4,7 puntos de PIB y un poco más de 1.000.000 de empleos, en el horizonte 2020. Estas medidas han sido agrupadas en varios grandes subconjuntos:

- Reforma territorial y racionalización de la acción pública;
- Reducción del coste del trabajo y mejora de la competitividad;
- Simplificación de la normativa y apertura de los mercados de bienes y servicios;
- Transición energética;
- Apoyo a la inversión y la innovación;
- Mercado laboral;
- Acompañamiento y apoyo de los grupos más alejados del empleo;
- Apoyo al poder adquisitivo de las familias humildes, y
- Reforma de la educación.

Según los datos transmitidos a la ponente, el impacto neto de estas reformas -una vez deducido el coste de su financiación-, debe ser reevaluado.

El resultado sería una ganancia de 2,5 puntos de PIB y 665.000 empleos creados en el horizonte 2020. Por lo que la Sra. Rabault apunta que “obviamente, es menos de lo que indicaban las previsiones basadas en las cifras brutas” adelantadas por el Gobierno.

A la luz del seguimiento de los objetivos de la “Estrategia Europa 2020”, estrategia a favor del crecimiento y el empleo adoptada en 2010 por la Unión Europea para los 10 años siguientes, Francia ha obtenido resultados satisfactorios en términos de formación, investigación y desarrollo, y objetivos de transición energética. Por el contrario, lleva retraso en materia de tasa de empleo y de reducción de la pobreza y la desigualdad. El porcentaje de población amenazada de pobreza ha pasado de un 18,1% en 2013 a un 18,5% en 2014. El número de personas amenazadas por la pobreza ha aumentado en 389.000 desde 2008.

Programa de Estabilidad: se va a deber encontrar 4.000 millones de euros. El lunes 25 de abril, en vísperas del debate sobre el Pacto de Estabilidad en la Asamblea Nacional francesa, la ponente general de la comisión de Finanzas, Valérie Rabault, estableció un recuento riguroso y cuantificado de las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo desde principios de año por 4.000 millones de euros. En consecuencia, el Gobierno deberá realizar ahorros si, tal y como se ha comprometido, quiere respetar el programa de la reducción de los déficits públicos, prevista en un 3,3% del PIB en 2016, y en un 2,7% en 2017.

Una de las características del Programa de Estabilidad 2016-2019 que el Gobierno presentará en la Comisión Europea, es que prevé alcanzar sus objetivos de ajuste y, al mismo tiempo, continuar reduciendo los descuentos obligatorios (actuación que se inició en 2015). El alcanzar los objetivos descansa exclusivamente en el control de los gastos, lo cual supone una vigilancia rigurosa de los nuevos gastos comprometidos en el transcurso del año y en los ahorros complementarios que se puedan realizar para compensarlos.

La Sra. Rabault ha cuantificado también los nuevos gastos anunciados por el Gobierno a principios de este año. En primer lugar figura el Plan Empleo presentado por François Hollande el 18 de enero.

Su coste está evaluado en 1.000 millones de euros destinados a la prima para la contratación en las pequeñas y medianas empresas, y 600 millones para la formación de 500.000 demandantes de empleo suplementarios. Luego vienen las medidas decididas en febrero para los agricultores: 400 millones de euros para el Plan de apoyo a la cría de ganado, y 500 millones para la reducción de las cuotas sociales de los agricultores. El 31 de marzo se anunció la prolongación, durante un año, de la medida de sobre amortización de las inversiones de las empresas: 400 millones. Y en abril, las medidas a favor de los jóvenes anunciadas por Manuel Valls, que deberían pesar 200 millones de euros. Sumando el coste de la financiación de la transición energética (300 millones) y del aumento salarial de los funcionarios (unos 600 millones), el coste provisional de todas las medidas contempladas por el Ejecutivo será pues de 4.000 millones de euros. Lo que supone un ahorro equivalente si el Gobierno quiere cumplir con sus objetivos.

La tasa de paro publicada por Pôle emploi, correspondiente al mes de marzo, bajó de forma espectacular. Pôle emploi anunció el miércoles día 27 un retroceso casi histórico del paro en marzo pasado, con 60.000 demandantes de empleo menos en la categoría A (que no han ejercido ninguna actividad asalariada). Tal caída mensual no se conocía desde el año 2000.

Ésta ha beneficiado masivamente a los menores de 25 años e incluso, hecho inaudito, a los mayores de 50. También el paro de larga duración, en alza desde hace años, continúa siendo estable. Estos resultados caen en el mejor momento para François Hollande, que está tratando de convencer a los franceses de que la situación “está mejorando”. Ahora puede esgrimir que en el primer trimestre 2016, el paro ha disminuido en 50.000 personas. Hay que remontar cinco años para encontrar semejante bonanza.

Tras el estancamiento registrado en el último trimestre de 2015, este retroceso acredita la idea de una mejora estructural del frente del empleo, y hace eco a las cifras de la Acoess que, en el primer trimestre, ha registrado 1.870.000 de declaraciones de reclutamiento con contrato de más de un mes, un record desde hace más de cinco años.

Pero François Hollande no puede todavía hablar de la famosa reversión duradera de la curva del paro, a la que ha condicionado su candidatura para un nuevo mandato en 2017. El carácter errático de las cifras de estos últimos meses llama a interpretarlas con prudencia. Tanto más cuanto que la nueva presentación de las cifras adoptada por la ministra de Trabajo desde hace tres meses ya no detalla la evolución mensual de los motivos de entrada y salida, lo cual oculta eventuales “bugs”, como el que explicó la gran reducción de las cifras del paro en agosto de 2013. Sin embargo, es de subrayar que las bajas por falta de reinscripción han aumentado en más de un 8% en un mes.

Pôle emploi refuta cualquier problema eventual en relación con esta nueva hornada de cifras y explica más bien la amplitud de la caída de éstas en la categoría A a un fuerte efecto de báscula hacia las categorías B (+13.800) y C (+37.500), que agrupan a los parados registrados que ejercen una actividad reducida. Más allá de su amplitud, este fenómeno no es nada raro en periodo de reactivación económica: demandantes de empleo en paro completo vuelven a encontrar un puesto de trabajo con un CDD de corta duración o temporal.

Es también lo que tienden a demostrar las cifras publicadas ayer por los profesionales del trabajo temporal (ETT), que recogen un salto de esta clase de trabajo de un 5,9% en marzo, con relación a marzo de 2015.

Pero aunque el empleo precario parece así recuperarse de forma duradera, el reto continúa siendo su transformación en empleo duradero. El Ejecutivo apuesta por el recargo de las cuotas que gravan los CDD en el ámbito del proyecto de ley El Khomri.

El propio Ministerio de Trabajo francés publicó el martes, día 26 de abril, un comunicado de prensa de la ministra El Khomri con el título “una evolución positiva de las cifras del paro” en que recogía las cifras dadas por “Pôle emploi”, fijando la bajada de demandantes de empleo inscritos en este organismo francés en un porcentaje del 1,7%, en el que también se señaló el reforzamiento de las acciones de formación en 500.000 suplementarias.

El ministerio de Trabajo ha subrayado que este reflujo “es el resultado de la mejora gradual de la actividad [...] gracias, principalmente, a los efectos del Pacto de Responsabilidad”. También percibe los primeros efectos de la ayuda para la contratación en las pequeñas y medianas empresas, que “aumenta y acelera los efectos de la recuperación económica del país”, con 225.000 solicitudes de ayuda desde el mes de enero.

Por el contrario, es demasiado pronto para percibir los efectos anunciados de la duplicación de la formación de los demandantes de empleo de este año, cuyo despliegue acaba de iniciarse.

Una **encuesta de France Stratégie** publicada el mes pasado revela que el recurso al trabajo a tiempo parcial parece mostrar la existencia de un yacimiento de empleos infrutilizado y, según este organismo, la tasa de empleo de los jóvenes y los señores podría aumentar en Francia si el recurso a la actividad con jornada parcial aumentase.

France Stratégie constata que en 2014 Francia mostraba una tasa de empleo del 64,2%, inferior en 10 puntos a la de Alemania (73,8%), Reino Unido (71,9%), Dinamarca (72,8%) y Suecia (74,9%). Esta diferencia se concentra en el empleo a tiempo parcial, con una tasa del 11,9% (o sean 4.700.000 personas) en Francia, frente al 19,6% en Alemania, un 18,2% en Reino Unido, un 17,9% en Dinamarca y un 18,4% en Suecia.

Este organismo público se pregunta si tal desfase con países que cuentan con una tasa de paro baja significa que el trabajo a tiempo parcial podría constituir una « reserva de empleos » que se debería desarrollar.

En su informe, France Stratégie indica que hay que relativizar el déficit de empleos a tiempo parcial.

Primero, porque, en parte, está compensado con el hecho de que los franceses de edad media trabajan más a tiempo completo que sus vecinos europeos. En 2014, su tasa de empleo a tiempo completo alcanzaba un 43%, frente a un 37% en término medio en los países con una tasa de empleo muy alta. Según el organismo, esto es el resultado de las políticas públicas llevadas a cabo en Francia para ayudar a las mujeres a conciliar vida profesional y vida familiar (inversiones a favor del cuidado de los hijos, ritmos escolares compatibles con la actividad laboral de las madres que trabajan a tiempo completo, etc.).

Y después, porque en Francia, el empleo a tiempo parcial y el empleo a tiempo completo tienden a sustituirse uno a otro, contrariamente a lo que se observa en Alemania -por ejemplo-, donde las dos clases de empleo se complementan. Una de las razones es que el porcentaje de trabajo a tiempo parcial es más alto en Francia.

En 2014, la duración efectiva anual media de trabajo a tiempo parcial representaba el 59% de la duración media del trabajo de los trabajadores a tiempo completo. En los países con una tasa de empleo alta (excepto Suecia), esta proporción varía entre un 45 y un 50%. Por lo que France Stratégie saca la conclusión de que esto tiende a relativizar la idea según la cual existirían importantes reservas de empleos en Francia.

El organismo prosigue afirmando que, aunque hay que relativizar los beneficios eventuales del desarrollo del trabajo a tiempo parcial, existen no obstante “márgenes de maniobra” para

alentarlo en los dos extremos de la vida activa (tanto para los hombres como para las mujeres).

En el caso de los jóvenes, convendría favorecer la acumulación del empleo y la formación. Ello les permitiría conciliar una actividad remunerada con los estudios, garantizándoles así mayor inserción en el mercado laboral.

Para los séniores, France Stratégie estima que una salida del mercado laboral más progresiva, recurriendo al trabajo a tiempo parcial, constituye un medio de aumentar su tasa de empleo.

PROYECTO DE LEY SOBRE LA IGUALDAD Y LA CIUDADANÍA

El proyecto de ley sobre Igualdad y Ciudadanía, presentado en Consejo de ministros de 13 de abril de 2016, contiene una parte social destinada a reforzar la igualdad real en el empleo, la emancipación y la inserción social de los jóvenes. En este sentido facilita más el acceso al “tercer concurso de la función pública” y prevé desarrollar el servicio cívico. Prevé también medidas para favorecer la implicación ciudadana, como la creación de un permiso de participación en la gestión asociativa.

El proyecto de ley sobre igualdad y ciudadanía contiene medidas variadas entre las cuales, una parte entra en el ámbito de lo social. Además, el primer ministro ha anunciado que durante la tramitación parlamentaria se introducirá una enmienda para favorecer la concesión de la cobertura sanitaria universal (CMU-C) a los jóvenes que se encuentren en situación de ruptura con su familia.

Creación de un permiso de participación en la gestión asociativa

El proyecto de ley prevé aplicar el permiso de formación de cuadros y animadores de jóvenes de 6 días por año a los dirigentes asociativos benévolos. Se trata de crear un permiso no remunerado para todo trabajador, funcionario o agente público, que le permita formar parte como benévolo en el órgano de administración o dirección de una asociación. Este permiso, accesible sin requisito de edad, se podrá fraccionar en media jornada. Las otras modalidades de aplicación del permiso de formación de cuadros y animadores para la juventud se aplicarán a este nuevo permiso. Será asimilado a un periodo de trabajo efectivo (o de servicio efectivo en la función pública) y el empleador solo podría retrasarlo en razón de las necesidades de servicio de la empresa o el organismo. Además, la compatibilidad máxima autorizada de este derecho con el permiso de formación económico y sindical de los trabajadores sería de 12 días.

Se facilita el acceso al tercer concurso de la función pública

El proyecto de ley modifica los requisitos para el “tercer concurso”, que permite entrar en la función pública paralelamente a los concursos externos (destinados a los candidatos diplomados) e internos (reservados a los agentes públicos que tiene una cierta antigüedad), para abrirlos “más ampliamente a personas con itinerarios de formación o experiencias profesionales diferentes”. Así, con la modificación anunciada, esta vía estaría abierta a todas aquellas personas que justifiquen haber ejercido durante un cierto periodo una o varias actividades profesionales “de cualquier naturaleza”. También estaría abierta a los aprendices; para ello, el proyecto de ley computaría la duración de los contratos de aprendizaje, ya sean con empleadores públicos o privados, a efectos de cumplimiento del requisito de duración mínima de actividad profesional previa.

Además, se modificarán los estatutos particulares de los cuerpos y cuadros de empleos (que fijan las condiciones de acceso al tercer concurso) para abrir más ampliamente la posibilidad de utilizar esta vía, en particular en la categoría B, afirma la exposición de motivos. Se reducirán y armonizarán las duraciones de actividad profesional con el fin de aumentar el número de candidatos.

Efectividad de la prohibición de las discriminaciones en el empleo

El proyecto de ley hace coincidir la lista de motivos discriminatorios en materia de acceso al empleo, formación, condiciones de trabajo y promoción, previstos en el artículo 1 de la Ley de adaptación al derecho comunitario en el ámbito de la lucha contra las discriminaciones (Ley 2008-496 de 27 de mayo) con la lista del artículo 225-1 del código penal. Se trata de conseguir que estas disposiciones sean más comprensibles y que la prohibición de las discriminaciones sea más efectiva, indica la exposición de motivos. El proyecto de ley añade a la citada lista el estado de embarazo, la situación familiar, el origen, la apariencia física, el patronímico, el estado de salud, las características genéticas, las costumbres, las opiniones políticas y las actividades sindicales (reagrupadas actualmente con el término “convicciones” en la ley de adaptación).

Desarrollo del servicio cívico e inserción social de los jóvenes

Algunas medidas tienen como objetivo el desarrollo del servicio cívico y el fomento de la inserción social de los jóvenes:

- Diversificación de las estructuras de acogida de jóvenes de 16 a 25 años comprometidos en una misión de interés general (organismos de alojamiento social, sociedades públicas locales;
- Autorización a las personas jurídicas de derecho público beneficiarias de una homologación de servicio cívico de poner inscritos en el servicio cívico a disposición de terceras personas jurídicas de derecho público no homologadas pero que cumplen las condiciones legales de la homologación.

Además, con el fin de incentivar a los jóvenes para una participación ciudadana y facilitar su inserción, el proyecto de ley sienta un principio de validación obligatoria en el seno de las formaciones superiores de las competencias profesionales, conocimientos y aptitudes adquiridas por los estudiantes con ocasión de actividades extra académicas, ya sean realizadas de manera benévola, en la reserva operacional de la defensa o de un servicio cívico.

Mejora de los conocimientos en lengua francesa

Otra disposición importante: las acciones de mejora de conocimientos de la lengua francesa serán reconocidas como formando parte de la formación profesional a lo largo de la vida, de la misma manera que la lucha contra el analfabetismo y las acciones a favor del aprendizaje de la lengua francesa. Además, el proyecto de ley establece la lista de agentes encargados de la elaboración y aplicación de estos tres tipos de acciones. Así, esta responsabilidad se repartiría entre todos los servicios públicos, entidades territoriales y sus mancomunidades, las empresas y sus instituciones sociales, las asociaciones y las organizaciones sindicales y profesionales.